

Seminario internacional Archivos y Derechos Humanos

Conclusiones

El Seminario Internacional “Archivos y Derechos Humanos”, celebrado durante los días 14, 15 y 16 de noviembre en la ciudad de Málaga (España) ha contado con la participación de profesionales de ámbitos tan diversos como el derecho, la judicatura, los organismos no gubernamentales, los responsables de las distintas administraciones públicas, la arqueología, la historia, las asociaciones de víctimas y, por supuesto, de los archivos y de los archiveros; pero también de la participación de los propios ciudadanos, que no administrados en palabras del ponente Ángel Sánchez Blanco.

A lo largo de tres jornadas, han sido expuestas ponencias que han narrado experiencias, que han mostrado formas de trabajo tanto de investigadores como de archiveros, que han presentado videos y fotografías. De todo lo escuchado y visto, pueden ser presentadas algunas conclusiones destacadas, tal como expuso lo en la clausura del Seminario el Director General de Archivos de la Junta de Andalucía:

1. La importancia de una posición activa de los profesionales de todas las disciplinas que pueden incidir en la adecuada defensa de los derechos humanos y para el apoyo de cualquier iniciativa para saber que la ciudadanía proponga. Y desde luego la posición de los archiveros que, con una metodología y normativa claras, dan un paso al frente en el compromiso democrático, de manera que con ello se manifiesta una apuesta personal para que el servicio a la ciudadanía tenga un papel fundamental en una sociedad democrática, una sociedad que requiere transparencia de los actos en el ámbito de lo público.
2. El reconocimiento del papel que juega y el valor que tiene el documento de titularidad pública en la protección y la defensa de los derechos humanos, en el entendimiento de la democracia como el trabajo de todos y la posición que en ésta tienen los archivos de titularidad pública – sin olvidar los de titularidad privada- como centros que no sólo custodian la memoria sino también como unidades que conservan los testimonios y las pruebas que garantizan los derechos y las libertades de las sociedad en cualquier momento.
3. La necesidad de establecer políticas eficaces y comprometidas que permitan una adecuada gestión de los archivos, del tipo que sean, para que los potenciales usuarios puedan acceder a los documentos y a la información que en ellos se contienen sin más limitaciones que las recogidas normativamente.
4. La propuesta de creación de un grupo de trabajo de archivos judiciales en el seno del Consejo Internacional de Archivos.

En definitiva, en estos días se ha hablado de todo lo anteriormente expresado, pero lo más seguro es que se prosiga hablando de todas estas cuestiones, de políticas, de políticas

archivísticas y de gestión documental como piezas fundamentales en las estructuras de una sociedad que pretenda ser garante los derechos humanos y las libertades públicas.